

# Acusan Líneas Aéreas Violar la Ley

Información Pág. 13

# La Violencia Estalla En Barrios de Capital

SEGUNDA EDICIÓN

## El Nacional

de la Hora

56 Págs.

20 Cts.

Año XVIII

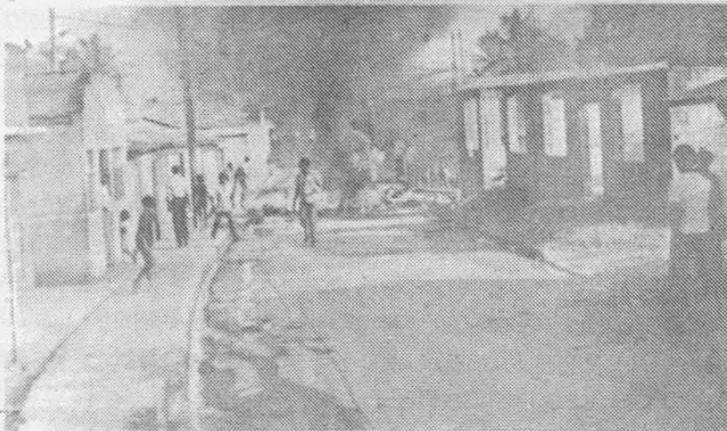
Santo Domingo, República Dominicana, Lunes, 23 de Abril de 1984

Nº. 6382

### Policia Hiere Mujer de Bala; Dañan Vehículos

Por Luis Eduardo Muñoz y Antonio Cuevas

Un accidente de tránsito ocurrido en la zona de la calle 100 de la capital, Santo Domingo, el día 22 de abril, resultó en la muerte de una mujer y en el daño de varios vehículos. Los hechos ocurrieron a las 10:30 de la mañana, cuando un camión de la empresa "El Nacional" se cruzó con un automóvil que circulaba en sentido contrario. El camión, al intentar dar vuelta a la izquierda, chocó con el automóvil, provocando la muerte de una mujer y el daño de varios vehículos.



Un hombre barre la calle en un barrio de Santo Domingo, el día 23 de abril de 1984. En el fondo se ven los edificios de la zona de la calle 100 de la capital, donde ocurrió el accidente que resultó en la muerte de una mujer y el daño de varios vehículos.

## Ejército Va Ensanche Luperón

Información Pág. 21

### Señalan Medidas Solo Conducen Empobrecimiento

Por Roberto Rodríguez A. En un artículo publicado en el número 6382 de "El Nacional", el autor señala que las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la inflación, como el control de precios y la fijación de salarios, solo conducen al empobrecimiento de la población. El autor argumenta que estas medidas reducen la capacidad de compra de los consumidores y afectan negativamente a las empresas privadas, lo que resulta en una disminución de la producción y en un aumento de la pobreza.

## MOTIN Y HUELGA: LA PROTESTA DE LOS DOMINICANOS POBRES

Roberto Cassá

### I

El examen de los movimientos sociales acaecidos en años recientes en República Dominicana tiene valor en sí, al tiempo que permite considerar aspectos de las tendencias históricas más generales. Estos movimientos, en efecto, se inscriben en varios niveles de cambio estructural, como el tránsito desde un tipo de economía agroexportadora endeblemente modernizada a otro sustentado en servicios vinculados al exterior. En lo político, cabe considerarlos como contrapartida del ordenamiento democrático, evidencia de los límites prácticos de sus supuestos en el sistema político, tanto en lo que respecta a la representación por los partidos de los intereses de la población como a que sean el canal idóneo de negociación con el estado. Adicionalmente, el examen provee elementos de reflexión acerca de los límites de los propios movimientos, punto importante ya que forma parte del estancamiento de las posibilidades de cambio.

En este escrito únicamente se analizarán los movimientos populares urbanos que han adquirido significado nacional. En realidad, estos movimientos están estrechamente vinculados a otros que no traspasan espacios locales, constituyendo una suerte de extensión a escala nacional de los moldes y objetivos que confieren vigencia a los últimos. La no inclusión de las protestas agrarias obedece al declive de las mismas, quizá correlacionado a la rápida disminución experimentada por el producto agropecuario y la población dedicada a la actividad. La impronta de la urbanización en gran medida ha conducido a que la protesta rural tienda a converger en ciertos parámetros y a coincidir en coyunturas con los movimientos urbanos.

Sumariamente, el tipo de movimiento social que ha dominado el panorama político durante algo más de la última

década contrasta con los movimientos sociales previos. Anteriormente fue característica la interdependencia entre un principio de cohesión clasista-profesional y el encuadramiento organizativo e ideológico por partidos políticos. Ciertamente que esto no constituyó un fenómeno exclusivo, pero no es difícil encontrar la primacía de movimientos del estilo del obrero-sindical, o del campesino, estudiantil y otros similares. Estos se constituían fundamentalmente a partir del paradigma de una revolución que transformara el sistema social y político. Aunque los contornos de la revolución no eran compartidos por las corrientes dispares, había algunos parámetros que permitían cierta cohesión frente al estado. Pese a que desde entonces el antagonista principal se ubicó en el estado, los movimientos estaban animados por un supuesto clasista, esgrimido incluso por el Partido Revolucionario Dominicano, de posiciones izquierdistas moderadas, el de mayor incidencia en el país durante mucho tiempo.

Se partía del principio de representación de intereses de las clases populares, por contraposición al supuesto de que el estado constituye la síntesis de los intereses de una o varias clases dominantes, dependiendo de una definición derivada del criterio teórico y de la percepción de la realidad. De tal manera, era comúnmente aceptado que la revolución comportaba un desplazamiento político y social. Por supuesto, se trataba de un concepto asumido en sectores minoritarios activos, pero que eran los que marcaban las tónicas dominantes de los movimientos políticos y sociales.

En cualquier caso, en la práctica se producía la integración de la protesta social dentro de la perspectiva política que apuntaba a cambios en el estado y, en perspectiva, a la transformación del sistema. De tal manera, la reivindicación puramente económica no traspasaba linderos socio-profesionales bastante restringidos en su alcance espacial, salvo escasas excepciones llamativas. En contrapartida, la sistematización a escala macrosocial de la propia demanda reivindicativa encontraba su cauce más adecuado en movilizaciones políticas, regidas por uno o varios partidos. De todas maneras, fue notable la capacidad de convocatoria de los partidos en contraste con la debilidad crónica de los espacios organizados desde ángulos clasistas o profesionales.

Una consecuencia de lo anterior se localiza en la subordinación de las organizaciones sociales a los lineamientos de los partidos políticos, lo que a veces se manifestaba en disposiciones instrumentalistas, excluyentes de la presencia de otras parcelas políticas o ideológicas, como se produjo en confederaciones sindicales de derecha e izquierda. Esto explica respuestas en los mecanismos organizados de acción, como los clubes culturales juveniles, cada uno de los cuales se encontraba generalmente controlado por algún partido político o coalición local, formal o informal, de varios partidos o corrientes políticas. Los clubes representaron un momento del movimiento popular, cuando comenzó a debilitarse el protagonismo del movimiento estudiantil; con este giro, la acción juvenil se centró en las barriadas pobres, de cara al conjunto de la población.

En definitiva, este perfil obedecía a ordenamientos estructurales y a mecanismos de cohesión social que durante largo tiempo se habían revelado más eficientes que los corporativos. Se puede atribuir esto, en principio, a la debilidad de los sectores dominantes en el plano estructural y a su subordinación política respecto al estado. De ahí que, ante la proclividad al ordenamiento autoritario, haya sido pertinente una respuesta politizada de los agentes sociales dominados. Se está en presencia de la lógica autoritarismo-populismo. La derrota de la Revolución de 1965, en particular, fue seguida por un esquema político de preeminencia estatista y autoritaria, regentado por el incumbente del ejecutivo, Joaquín Balaguer. No es curioso que, frente a este requerimiento del orden, se retroalimentara la vigencia de la revolución.

## II

En los últimos tiempos, lejos de atenuarse, los factores estructurales antes considerados se han ampliado en el contexto de las tendencias gravitantes. Ahora bien, el cambio de los contenidos y los mecanismos de acción de los movimientos sociales ha sido producto de las soluciones específicas que tuvieron los enfrentamientos sociales y políticos. Primeramente, cabe considerar la derrota definitiva del proyecto revolucionario, evidenciada en la primera mitad

de la década de 1970, a consecuencia de la falta de consistencia de sus portadores y de la modernización económica lograda por el sistema. Ambos hechos - modernización y superación del peligro revolucionario- crearon las premisas para que se agotara el esquema autoritario y el sistema político entrara en una fase de democratización restringida.

Lo último se manifestó relevantemente en el desplazamiento del gobierno de Balaguer en 1978 por el Partido Revolucionario Dominicano. Para gobernar, el PRD tuvo que entrar en pactos con los principales sectores del bloque dominante. Y, aunque no se descartaba, en teoría, la necesidad de una revolución, se asistía a una lógica de búsqueda de ganancias políticas y sociales viables en el corto plazo y dentro de los contornos del sistema social y político. El PRD se adecuaba, por lo tanto, a modificaciones sustanciales de las actitudes de clases y otros agentes sociales.

La subordinación a que se vio sometido el nuevo grupo burocrático por parte de los agentes tradicionales de poder motivó que no desaparecieran las causas de fondo de los movimientos sociales contestatarios. Entre otras cosas, se reveló que las libertades políticas no encontraban su correlato en las relaciones de clase en el nivel de las unidades del aparato productivo. Esto se manifestó, por ejemplo, en una oleada de huelgas en los meses posteriores al «cambio» de 1978, que causó la esperanza de una reconstitución del movimiento sindical, lo que al poco tiempo se mostró fallido. A pesar de que los medios sindicales dirigenciales se inclinaron ante la presión de las bases y se unificaron en la Conferencia Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la tendencia careció de continuidad. En definitiva, la democratización resultó harto limitada en el terreno de las relaciones sociales, aun cuando en su momento generara grandes expectativas a ese respecto. Finalmente, la forma en que se produjo la democratización condujo a una corrupción creciente dentro de las filas dirigenciales del PRD y a una pérdida de eficacia y centralidad del aparato estatal.

De todas maneras, el PRD usó los mecanismos necesarios para neutralizar, en medida considerable, los medios con que contaban los sectores contestatarios. Habituada a la perspectiva catastrofista de la revolución, la izquierda no supo

ni pudo responder al reto que le presentaban sus antiguos aliados. A nivel de visión de masas, el problema se tornó más complejo por cuanto se apreciaba que el alejamiento respecto al PRD no se revertía necesariamente en ruptura.

Independientemente de estas relaciones, se produjeron cambios sustanciales en el sistema político que subyacen en los precedentes inmediatos de los nuevos movimientos populares. Lo más importante a ese respecto consistió en una desideologización de la política, condicionada por la desaparición a corto plazo de la perspectiva revolucionaria y los mecanismos alternativos de relación entre clases y grupos políticos. A tono con todo esto, los perfiles de los partidos políticos mayoritarios, antes netamente diferenciados, han tendido a aproximarse. A su vez, lo anterior ha llevado a una creciente distancia de la mayoría de la población respecto a la confianza en las posibilidades brindadas por los mecanismos políticos convencionales, como los partidos y las elecciones, para la resolución de sus expectativas.

Como consecuencia de lo anterior, se ha asistido a una despolitización que forma parte de mecanismos culturales, en parte producto de circunstancias mundiales y, no menos, de las resoluciones de los debates políticos locales previos. De todas maneras, una gran parte de la población no abandonó por completo ciertos niveles de confianza en los mecanismos del sistema político, por lo que se dieron fenómenos tan variados como la recuperación del liderazgo de Joaquín Balaguer, el reciclaje decreciente de la influencia del PRD gracias a la competencia de grupos enfrentados al sector aupado a la burocracia estatal y, por último, el ascendiente progresivo del Partido de la Liberación Dominicana. Particularmente el PLD logró ocupar el espacio funcional que antes había desempeñado el PRD, retomando una propuesta pragmática y moderada de corte populista. Esta se sustentaba en la promesa de honestidad y eficiencia, y estaba desprovista de consideración clasista e ideológica, para lo cual abjuró de lineamientos de izquierda y adoptó el pensamiento de Bosch, el líder, como ideología, el «boschismo».

Aun tomando en cuenta estas facetas de recomposición del sistema político, y precisamente por la forma en que ellas operaron, los movimientos sociales fueron ganando un espacio creciente a medida que se fueron definiendo sus perfiles

novedosos. Sin descartar las expectativas en el recambio gubernamental por vía de elecciones, fueron tomando un protagonismo que resultaba inversamente proporcional al que alcanzaban los partidos políticos en ocasión de las coyunturas electorales. En fin de cuentas, no se trataba solamente de un comportamiento escindido en el orden temporal, sino de la emergencia de una lógica compleja, mediante la cual coexistían rezagos de las diversas formas de expectativas en los partidos y el descreimiento que éstos merecían a la mayor parte de la población.

Esta lógica comportaba, entre otros ingredientes, la primacía de la demanda inmediata y de corte defensivo. Es decir, el descreimiento en opciones globales de transformación se revierte en una centralidad de la demanda reivindicativa puntual. Si bien se trata de un fenómeno político, su vigencia debe ser atribuida fundamentalmente al deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población. A falta de perspectivas ciertas de cambio general, excepción hecha de las que se renuevan en períodos electorales, los movimientos populares encuentran su sustento precisamente en la resistencia a tolerar mayores deterioros en los niveles de vida.

Para entender los contenidos de estos movimientos se debe tomar en consideración el traslado del debate respecto a la distribución del producto nacional desde el nivel de las clases al terreno macrosocial dependiente de las políticas de estado. En forma más directa, este patrón de comportamiento defensivo deja de articularse centralmente a la disputa con los propietarios de los medios de producción y servicios; se desplaza hacia los motivos que se interpretan responsables del deterioro del nivel de vida, los cuales convergen inevitablemente en las políticas gubernamentales. A su vez, la centralidad del adversario en el estado, y específicamente en su ejecutivo, fue un resultado del agotamiento del esquema de desarrollo implantado, sustentado en el traslado de los excedentes desde los sectores agrarios exportadores hacia el aparato industrial urbano. En este trasiego cupo al estado desempeñar una función crucial, dado el alto peso del sector público. Cuando este esquema desarrollista se agotó, se hizo precisa la aplicación de preceptos neoliberales, fundamentalmente por exigencia de los organismos internacionales. Como se verá, se produce una

correlación entre movimientos sociales populares y las políticas neoliberales que comienzan a ponerse en práctica bajo el gobierno de Salvador Jorge Blanco, la segunda administración del PRD después de 1978.

### III

En contraste con los patrones vistos, los movimientos populares de significado nacional se estructuran sobre una base rigurosamente territorial. En fin de cuentas, son producto de la sumatoria de esfuerzos en reducidas escalas locales, resultado que no se obtuvo de golpe sino por la iniciativa de los gestores dirigentes de las movilizaciones. La protesta involucra al conjunto de la población, con la excepción de quienes se comprometen con el equipo político gobernante. El esquema de consenso en contra del estado surge espontáneamente y sólo se racionaliza con el tiempo, siendo resultado del tipo de demandas que aglutinan al colectivo. En sus prolegómenos de movimientos que no trascendían el horizonte local, durante los años 70, se dirigían fundamentalmente a reclamar la instalación o mejoría de servicios públicos, como el agua, la electricidad, las vías de comunicación, centros de educación y salud, los medios de transporte, etc. Sólo a medida que se generó un deterioro general de los niveles de vida, desde inicios de los años 80, se fueron trasladando a otras demandas que posibilitaban matices inéditos. En su núcleo, las reivindicaciones no se dirigieron hacia mejorías de los niveles de vida, sino a resistir su deterioro. En tal sentido, la percepción popular responsable de estos movimientos sociales estribaba en el criterio cultural de que no eran justos ni tolerables nuevos atentados a los niveles de ingreso.

Lo que estaba en juego, sobre cualquier otra variable, era el mantenimiento del ingreso real, en gran medida afectado por políticas públicas que repercutían en alzas de precios. Desde el momento en que las alzas de precios no se acompañaban de reajustes salariales, la principal consigna que ganó los barrios no fue tanto la mejoría salarial sino el retorno a los niveles previos de precios. Espontáneamente, y por encima de lo que proclamaran las centrales sindicales, se pasó a confiar más en la presión contra las alzas de precios que en

la demanda de elevaciones salariales, con lo que se producía un comportamiento nuevo respecto a las anteriores protestas de los sectores trabajadores.

A diferencia de lo que sucedía antes, parece descartable que, en perspectiva, estos movimientos hayan estado motivados por el propósito de modificación del sistema político e incluso (haciendo parcial excepción de la coyuntura de 1990-91) de la variación del grupo gobernante. Desde esa óptica es que se puede comprender su carácter prepolítico. Claro que la misma implica la política, pues viene siendo la forma de expresión del interés de los sectores trabajadores y de la generalidad de la población. Pero la movilización popular se conforma en función de su paralelismo al sistema político. En segundo lugar, el carácter prepolítico está dado por la ausencia de un programa unificador que se proponga un diseño alternativo de sociedad e incluso de políticas públicas. Simplemente, desamparadas de una dimensión cierta comúnmente aceptable que traspase reivindicaciones económicas elementales, las masas pobres se restringen a una postura de resistencia frente al poder que carece de contrapartida.

Ahora bien, probablemente por esa carencia en su sustrato, a la movilización popular desde el principio le resultó indispensable la presencia de agentes externos. De la movilización espontánea de la población no emergen instancias institucionales de significado apreciable. Así, a su alrededor se gestan dos instancias organizadas que reclaman la dirección de los movimientos populares y que lo logran parcialmente: las confederaciones sindicales y las organizaciones territoriales de variada factura, como las vinculadas a sectores progresistas de la iglesia católica, las promovidas por partidos de izquierda o las que surgen como alternativa a los partidos aunque siguiendo idénticos propósitos. Ambos tipos de organizaciones tratan de compensar la inexistencia de un plano institucional de las masas y, al hacerlo, atribuyen sus propios designios al sentir de aquéllas. De ahí que las confederaciones perfilen un plano reivindicativo sindical, ajeno a los móviles que confieren consistencia a la movilización de las organizaciones territoriales. Desde otro ángulo, los militantes de las organizaciones territoriales atribuyen a las protestas un contenido político potencialmente revolucionario que,

racionalizado intelectualmente, se concibe resultado de la emergencia de un sujeto alternativo a la clase obrera.

Existen distintas vertientes de apreciación puntual del significado de este sujeto, dependiendo de la organización que efectúa el análisis. Pero, en verdad, si las masas son ajenas al tipo de demanda tradicional de las confederaciones, lo son aún más respecto a las propuestas políticas radicales de las organizaciones territoriales. No parece, por lo demás, que, después de años de relación con sectores apreciables de la población, los activistas de izquierda hayan dejado un mensaje representativo de sus prédicas y acciones. Esta insuficiencia decisiva se puede extender a los agrupamientos religiosos o afines a sectores progresistas de la iglesia, a pesar de ser los que han logrado un acercamiento de cierta significación práctica con masas pobres, quizá gracias a operar como corriente laxa a escala nacional.

La distancia entre las organizaciones y las masas que pretenden representar se puede atribuir no sólo a la reversión de los niveles de politización de la sociedad, a consecuencia de la frustración dejada por el PRD, sino, por igual, a la impericia de los militantes para, en esa situación, tornarse el vehículo de contenidos políticos distintos. Ha sido comportamiento sistematizado de los militantes leer en claves predeterminadas las actuaciones de las masas.

La capacidad de convocatoria de las centrales sindicales y de las organizaciones territoriales depende de la ausencia de una compactación orgánica de las masas. De ahí que estas últimas presten atención a los llamados a huelgas y protestas al margen de las motivaciones que los acompañan, simplemente porque se adecúan a los motivos específicos que tienen para protestar. Como se ha visto, esos motivos se sustentan en el deterioro de las condiciones de vida. En tal sentido, el comportamiento de las masas es inmediatista y coyuntural, y es el que confiere validez a los llamados a la movilización. En este tramado se encuentra la base de estructuración de los movimientos sociales, definibles como de presencia aleatoria de las masas por medio de la protesta, reverso de la ausencia de un plano de institucionalidad. Esta última ausencia se compensa con los organismos territoriales, en los cuales no están presentes las masas.

Es en esta combinación que el movimiento social alcanza

su vigencia y sus debilidades. Se la puede definir como la combinación del motín popular y la huelga general, sea local o nacional. Para comprender esta especificidad se deben tomar en cuenta los múltiples factores que conspiran contra los movimientos reivindicativos articulados al esquema clásico de la huelga. Frente al inmenso poder estatal, la indiferencia frecuente de la generalidad de los partidos y los riesgos que provienen de la dificultad de encontrar empleo, la protesta encuentra su cauce en el diseño del motín. Este, por lo demás, expresa el plano elemental de indignación moral, de corte destructivo, que embarga a la masa y la dificultad de que se plasme en mecanismos más ordenados y sistemáticos.

El motín adquiere sentido en la medida en que tiene los mayores efectos contra las políticas públicas. Los gobiernos han mostrado desprecio a la protesta pacífica, de manera que la violencia o la posibilidad de su ejercicio se hacen el medio por excelencia de comunicación de la protesta. Pero, en fin de cuentas, la violencia que se plasma en el motín viene a ser recurso indispensable de que se produzca la protesta en su conceptualización de huelga general. Por definición, no puede haber huelga general sin la posible ocurrencia de la violencia. Puede haber motín sin llamado a huelga, pero no huelga sin la sombra del motín.

Se ha aducido, como han hecho algunos articulistas de derecha de la prensa diaria, que esta relación constituye la prueba de la ausencia de sostén popular de los llamados a huelga general. El razonamiento es falaz, puesto que otras situaciones muestran que la amenaza de violencia no basta para generar las paralizaciones. La violencia es condición de las huelgas; pero no lo es suficientemente en caso de que carezca de la solidaridad de las masas. Estas se amparan en la ocurrencia de la violencia para abandonar las ocupaciones habituales, incluyendo la riesgosa ausencia a empresas industriales o de servicios.

Cuando falta el apoyo efectivo, incluso la violencia en curso no provoca la paralización o, sobre todo, no logra sostenerla por mucho tiempo. Esto se observa en la generalidad de los movimientos. Sea por las dificultades de justificar la inasistencia al trabajo, por la dependencia de las actividades de cuenta propia que presionan al retorno a labores para la subsistencia diaria o por el sentido político de restricción a lo inmediatamente

factible, lo cierto es que esa solidaridad actuante de las grandes mayorías de la población a los llamados a huelga no se prolonga generalmente más de un día. De la propia sociedad que se paraliza proviene el movimiento espontáneo al retorno a las actividades normales, como evidencian casi todos los movimientos caracterizados por la convergencia de la huelga y el motín a escala nacional. No deja de ser curioso que los movimientos locales, en la medida en que dependen de demandas más palpables, tienden a registrar mayor capacidad de duración.

#### IV

La primera ocasión en que se manifestó un movimiento popular acorde con los componentes arriba visualizados se produjo un año después de la llegada del PRD al poder. Por lo visto, desde antes de la aplicación de preceptos neoliberales comenzaban a agotarse las medidas redistributivas populistas tomadas por ese partido y asomaban malestares llamados a adquirir niveles explosivos.

Con motivo de una de las alzas de precios del petróleo, a fines de julio de 1979, el gobierno dispuso un aumento en los precios de la gasolina y otros combustibles. Una coalición de organizaciones sindicales de choferes llamó a huelga, la cual adquirió resonancia no sólo por la paralización del transporte público sino por la secuela que acarreó. En efecto, a instancias de esta convocatoria choferil, y por encima del vasto operativo policial, sin que aparentemente nadie hiciera un llamado expreso, se desarrollaron manifestaciones en avenidas que atraviesan barriadas pobres del norte de la ciudad. Este hecho inauguró un nuevo patrón del movimiento popular por el significado político que inmediatamente adquirió. Militantes del partido de gobierno, al parecer empleados en el Ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo, provistos de armas de fuego asumieron la tarea de represión sobre huelguistas y amotinados, con el saldo de varios muertos y muchos más heridos. Del plano de la unidad productiva, la democracia empezaba también a esfumarse del derecho a la protesta.

Esta represión sanguinaria trajo males de conciencia a dirigentes del PRD. Su comité ejecutivo, dominado por la facción rival que seguía Salvador Jorge Blanco, se distanció

del gobierno al criticar el empleo de civiles armados en el mantenimiento del orden. Por otra parte, José Francisco Peña Gómez culpó a una coalición del Partido Reformista de Balaguer, que habría estado detrás de los sindicatos de choferes, y partidos de izquierda. Como lo reiteraría en otras ocasiones, buscando un recurso para prevenir el agravamiento de la brecha entre su partido y el pueblo, Peña Gómez llamó a un giro hacia la izquierda, que, por supuesto, no tuvo consecuencias. No podía tenerlas pues, esencialmente, el PRD sumaba incompetencia política a la degeneración moral y a su apego a los intereses de los poderosos.

Lo último es tan cierto que a menos de un año se reeditó lo acontecido en los primeros días de agosto de 1989. Con motivo de un nuevo incremento de los precios de la gasolina, de nuevo los sindicatos de choferes llamaron a la huelga el 30 de mayo de 1980, acompañándose la misma de motines populares. En esta ocasión sí ya se puede detectar una presencia consciente de grupos de militantes de izquierda a propósito de manifestaciones y enfrentamientos a la policía. En vista de la aceptación que tuvo entre los choferes y del respaldo popular, la huelga fue prolongada. A diferencia de la de 1979, cubrió prácticamente todo el país, dando lugar ya a todos los ingredientes del movimiento popular sometido a estudio. Tanto en las barriadas pobres de Santo Domingo como en la mayoría de las otras ciudades se abrieron focos de enfrentamiento violento, sosteniendo el hecho práctico de una parálisis general de actividades. Varias carreteras del Cibao Central fueron bloqueadas con árboles y piedras. En especial los manifestantes se empeñaron en estorbar la circulación de vehículos. En los cinco días de movilizaciones esporádicas se produjeron 4 muertes, 16 heridos de bala y más de 1,500 apresamientos (500 de ellos en ciudades del interior).

A pesar de que se desarrollaron otros movimientos locales de esa especie en períodos posteriores y que las condiciones de las masas no cesaron de empeorar, el PRD en el gobierno sólo se vio desbordado cuando decidió la aplicación de la política de ajuste pautada por el Fondo Monetario Internacional. El presidente Jorge Blanco, quien había logrado el triunfo electoral en base a una prédica reformista progresista, tan pronto tomó el poder aplicó una política económica radicalmente opuesta. Inicialmente, trató infructuosamente de

que los organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos suavizaran las exigencias del ajuste. Finalmente, en abril de 1984, tras varias modificaciones parciales en el tipo de cambio, aprovechando los días de vacaciones de la semana santa, el gobierno decretó alzas abruptas de varios artículos de primera necesidad, como harina, grasas vegetales y leche, a lo que siguió una cadena inmediata de alzas especulativas.

Tan pronto se retornó del feriado se produjo una movilización popular sin precedentes. Tuvo una duración de tres días e incluyó a la generalidad de la población urbana y a amplios sectores de la población rural. El estallido de la protesta partió de algunas barriadas pobres de la ciudad capital, pero se extendió con rapidez a sectores contiguos, hasta que a las pocas horas se tornó en un fenómeno nacional de proporciones colosales. Decenas de miles de jóvenes se habían lanzado a las calles a protestar y a atacar a los contingentes policiales y militares, impidiendo o dificultando que penetraran en las barriadas. Por lo visto, esos jóvenes, apostados en las esquinas, donde quemaban neumáticos y levantaban precarias barricadas, gozaban del apoyo de la población circunvecina. Sobre todo, perseguían manifestar la indignación generalizada que habían provocado las alzas de precios e impedir la circulación de vehículos como medio ya reconocidamente eficiente para un paro forzoso de actividades.

No obstante la participación de pandillas juveniles y otros sectores delictivos, éstos suponían un componente menor del movimiento, lo que se ilustra en el escaso número de establecimientos comerciales asaltados. Lo que agudizó la confrontación fue la respuesta de las fuerzas policiales y militares, que pocas horas después de comenzar las manifestaciones optaron por disparar. No se dispone de una cifra confiable de las víctimas, pero es posible que el número de muertos se acercara a 120, de los que en los días siguientes se registraron los nombres de 68; los heridos de bala superaron el millar y los apresados y golpeados por lo menos llegaron a cinco mil.

Incluso ese dispositivo criminal no resultó suficiente para calmar la indignación. Por el contrario, el clímax se alcanzó al día siguiente de iniciado el movimiento, coincidiendo con el aniversario de la revolución acaecida diecinueve años atrás. Esta circunstancia fortuita, no tomada en cuenta por la

población, favoreció una lectura sobrepolitizada de lo que acontecía. El 24 de abril el país estaba paralizado por completo y, salvo en las zonas residenciales de la burguesía, se escenificaban enfrentamientos. En numerosas localidades rurales la población se adhirió a la protesta mediante la colocación de árboles y piedras de gran tamaño en las carreteras. Sólo al tercer día el movimiento empezó a decrecer por sí mismo, finalizando simbólicamente después que se llamó al retorno a las actividades para el día siguiente, produciéndose entonces un intenso tiroteo de parte de las fuerzas militares en barrios del norte de la capital.

Es notable que un hecho de esta magnitud fuera resultado de la convocatoria a huelga barrial por parte de un centenar de organizaciones territoriales de los barrios Capotillo y Simón Bolívar, los cuales se encuentran entre los más pobres de la ciudad de Santo Domingo. Por lo visto, los organizadores, agrupados en la Coordinadora de Lucha Popular de Capotillo, no tenían idea de la repercusión que estaba llamada a tener su acción. El llamado a un paro barrial de 12 horas fue la chispa que incendió la pradera. En lo adelante no se dispone de evidencia acerca de instancias organizadas en la extensión del movimiento. Ni siquiera puede afirmarse que la movilización en los dos barrios en que se inició se mantuviera bajo el control de los militantes izquierdistas que la convocaron.

Sin duda que convergieron diversos intereses, pero no se puede afirmar que algún sector dirigiera o que de alguna manera fuera responsable del alcance de los hechos, como diversos analistas han sugerido. Por supuesto, el sector más activo con un criterio político estuvo compuesto de los militantes de izquierda. Ahora bien, la generalidad de ellos simplemente se atuvieron a sumarse a las movilizaciones y actuar en ellas, descontextualizados de sus respectivas organizaciones, todas sorprendidas del estallido y desprovistas de iniciativa política. Cuando ocasionalmente los militantes trataban de politizar el motín lanzando consignas antigubernamentales, experimentaban la indiferencia o el rechazo de la población amotinada, incluyendo los más jóvenes y beligerantes. Ciertamente, además, hay suficiente evidencia de la presencia de militantes del Partido Reformista de Joaquín Balaguer en la agitación, quienes se dedicaron a distribuir bebidas alcohólicas. De la misma manera, está fuera de duda la presencia de

pandilleros y delincuentes comunes. Pero en la magnitud de las movilizaciones los izquierdistas, los reformistas y los delincuentes, sobre todo los dos últimos sectores, no pasaron de minorías aisladas y carentes de coordinación, por lo que no podían proveer la tónica dominante de la protesta.

Faltaba, pues, una instancia organizada que se hiciera cargo del hecho, por cuanto las organizaciones territoriales en ningún momento llegaron a tenerlo bajo su control, aun cuando algunas hubiesen estado detrás de la convocatoria. Tal vacío fue aprovechado por las centrales sindicales con el fin de adquirir un protagonismo que no lograban mediante el encuadramiento de los trabajadores en sindicatos de empresa. De hecho, la debilidad sempiterna del movimiento sindical se venía reparando a ese nivel de cúpula, por cuanto los dirigentes habían captado que la dirección del clamor nacional contra los efectos de las políticas neoliberales proveía un medio de recomposición. Esa percepción compartida se encuentra en el origen de la unidad de acción que pasaron a practicar centrales sindicales que poco tiempo antes se disputaban acremente el control de sectores obreros bajo supuestos ideológicos en realidad bastante relativos.

A las pocas horas de iniciadas las protestas, los dirigentes de las centrales asumieron su dirección formal, convalidando un llamado a huelga general de 24 horas más. En realidad, esa convocatoria carecía de toda efectividad, ya que se realizaba ante un hecho consumado, y es de anotar que las protestas siguieron por 48 horas. Tampoco puede decirse que en lo adelante las centrales se hiciesen de la dirección efectiva del movimiento de protesta. No obstante, los sindicalistas de alguna manera pudieron jugar el papel de interlocutores del gobierno, autoabrogándose una representación que no les correspondía.

Un aspecto a tomar en cuenta en ese afán de protagonismo es que detrás de algunas de esas organizaciones sindicales se encontraban partidos de izquierda, parte de los cuales venían practicando una unidad de acción que en las elecciones se manifestó en dos coaliciones, la Unidad Socialista y la Izquierda Unida, las cuales, poco después, se fundieron en el Frente de Izquierda Dominicana. Los partidos de izquierda convalidaron la representación sindical, al tiempo que se propusieron erigirse también en portaestandartes directos del

movimiento popular. Su consideración sobrepolitizada de los acontecimientos los condujo a interpretarlos como señal de un auge revolucionario próximo, para uno de ellos la «revolución inminente».

El resultado de esta movilización fue una ruptura sensible entre la mayoría de la población y el grupo gobernante, cuyo partido dejó de representar la mayoría absoluta, aunque todavía había logrado ganar las elecciones dos años antes y las perdería en el aspecto legal, por escaso margen, dos años después. De todas maneras, el descrédito del PRD iba, con mucho, más allá del deterioro electoral, pues se le veía como mal menor ante el posible retorno de Balaguer. A la postre, esto se revirtió en una tercera opción, la del PLD, que propiamente se tornó opción de poder para las elecciones de 1990. Es cierto que la masacre fue obra de las tropas y que los mandos militares solicitaron la autorización al ejecutivo para disparar. Pero no menos cierto es que, espantados ante la movilización popular, todas las fracciones del partido de gobierno se unificaron en apoyo a la medida represiva.

## V

Abril de 1984 es el momento culminante del patrón del nuevo movimiento popular y al mismo tiempo jugó un papel fundador de su desenvolvimiento ulterior. Esto se puede atribuir sobre todo a la interpretación de que fue objeto por parte de los militantes. Encontraron, de común acuerdo, que la movilización constituía una señal irrecusable de proclividad revolucionaria en las masas. De tal manera, se produjo una metamorfosis en las organizaciones, las cuales pasaron a visualizar preparativos vagos para el paso a una fase insurreccional bajo el supuesto de la emergencia de un sujeto histórico alternativo.

Esta lectura de lo ocurrido en abril de 1984 fue sostenida durante un tiempo de forma casi unánime en los medios militantes de izquierda. Pero como pasaba el tiempo y no se reiteraba la esperada movilización de masas, sobrevinieron debates, no siempre formalmente organizados, mediante los cuales se buscaba establecer las causas de lo que sucedía. En medio del voluntarismo animado -o aceptado- por los dirigentes, muchos militantes entendieron que el problema

principal estribaba en incapacidad dirigencial de sus propias organizaciones. Probablemente distinguieron una imputación de inadecuación de principios organizativos de la que concluía en la ausencia de voluntad revolucionaria de parte de una porción de dirigentes. En algún que otro caso, fueron los principales dirigentes que encabezaron el cuestionamiento. A instancia de la impresión dejada por el gran motín, a quienes así pensaban no les cupo duda en que si se enarbolaba una voluntad insurreccional las masas responderían, oportunidad que no podía dejarse pasar, so pena de cargar con una grave responsabilidad moral.

En consecuencia, advino una tendencia escisionista en casi todas las organizaciones de izquierda, que culminó en mayor dispersión y aislamiento de la sociedad. En algunos casos, grupos de militantes renunciaban en desacuerdo con otros y se aislaban de toda práctica. Más normal vino a ser la escisión planeada en vistas de formar una nueva organización. No dejó de haber ocasiones en que se fundieron dos o más de esos grupos provenientes de organizaciones distintas, pero constituyeron excepciones. Los nuevos grupos adoptaban el criterio de que no era necesario actuar en los mecanismos del sistema político, sino de frente a las masas, para lo cual se valieron de diversos medios, entre ellos la creación de agregar organizaciones concebidas para que acogieran a los sectores más desarrollados de las masas. Es probable que hayan desplegado labores de importancia, en gran medida preparativas de las movilizaciones de los años posteriores. Lo que no parece es que tuvieron éxito en lograr la integración organizada de sectores considerables de las propias masas trabajadoras.

A pesar de esta incapacidad de integración, los medios izquierdistas lograron hacerse presentes en el escenario fundamentalmente a través de dos instancias: la primera, de escala local, reproducía en la práctica de los militantes la dimensión espacial limitada con que se llevaba a cabo generalmente la protesta popular. De tal manera, emergieron numerosos islotes, en gran medida aislados entre sí, producto de la confianza deparada en el territorio sujeto a la práctica directa. El segundo tipo de respuesta provino de la urgencia de que se superara la fragmentación local, instituyéndose diversos tipos de mecanismos coordinadores. Se debe decir

respecto a esto último que numerosas organizaciones políticas locales en ningún momento se integraron a estos aparatos de coordinación, puesto que los consideraron, razonablemente, como sujetos a directrices provenientes de algunos partidos o coaliciones, con los cuales se podía tener eventuales divergencias.

A pesar de que en el fondo no se superaba la fragmentación, estos aparatos coordinadores desempeñaron funciones importantes de convocatoria a escala nacional. No parece que alguno de ellos lograra una preeminencia sólida, puesto que el protagonismo de cada uno dependió de combinaciones de variables y generalmente no pasó de ser transitorio. Es interesante apreciar que se fue desarrollando una tendencia dual entre el principio de coordinación sustentado en lo territorial (o popular, como se le llamaba) y el de las organizaciones de escala nacional, principalmente las confederaciones sindicales. Aunque, como se verá en el siguiente acápite, representaron fundamentalmente opciones opuestas que terminarían en actitudes antagónicas, en las siguientes movilizaciones que acaecieron entre 1987 y 1989 todavía se llegaron a formar mecanismos de coordinación que integraban ambas vertientes. Estas tentativas no lograron superar un estadio de precariedad y rápidamente se abandonaron. En fin de cuentas, el ascenso de los movimientos populares a fines de la década de 1980 y a inicios de la actual se vio matizado por una lucha acre por el control de la convocatoria a las masas entre las coordinaciones territoriales y las sindicales. Las primeras tuvieron por máxima expresión al Colectivo de Organizaciones Populares, de posturas hiperpolitizadas y de orientación revolucionaria, y las segundas a la Coordinadora Sindical, de posición negociadora y reformista.

## VI

En los años siguientes a 1984, la movilización popular no pudo traspasar el espacio local. Esto se puede atribuir a varias circunstancias, la más importante de las cuales fue la reubicación de la atención de gran parte de la población hacia las expectativas que suscitaban las elecciones convocadas para 1986. Es de importancia que en ese momento el PLD

lograra postularse como alternativa distinta a los dos otros partidos y alcanzara cerca del 20% de los votos nacionales, lo que contribuyó decisivamente a que Joaquín Balaguer fuese de nuevo el candidato declarado triunfador. De la misma manera, Balaguer operó con una nueva política económica, que tomaba distancia frente a la receta del ajuste aceptada por el anterior gobierno. A pesar de mantener los salarios bajos, Balaguer se benefició del ajuste de los años anteriores para continuar sus proverbiales concepciones sobre la construcción como elemento dinamizador de toda la economía. En definitiva se evidenció el desfase de esta propuesta, que llevaría muy poco tiempo después a un deterioro todavía mayor. En lo inmediato, de todas maneras, se registró cierto éxito, lo que introdujo un ritmo lento a la recuperación de la protesta social.

Un segundo factor que debe ser considerado en la forma en que se desarrolló la gestación de las grandes movilizaciones de fines de la década pasada estribó en la hábil política desplegada por Balaguer de descargar todos los males existentes en la corrupción administrativa practicada por los dirigentes del PRD cuando se encontraban en el poder, especialmente durante la administración de Jorge Blanco. Junto a este dispositivo, el viejo líder derechista mostró ahora una nueva faceta de respeto aparente por las libertades democráticas, de disposición al diálogo y al consenso verbal con demandas de la sociedad. En particular, tuvo el tacto de proclamar que no se oponía a las reivindicaciones de los sectores populares -aunque las finanzas del estado constituyeran un caso especial-, siempre que no se recurriera a la alteración del orden público.

Todo lo anterior ayuda a explicar que las primeras convocatorias de protesta nacional, en los años 1987 y 1988, no alcanzaran una magnitud contundente y que algunas se revelaran fallidas. Al menos, las huelgas generales convocadas el 28 de julio de 1987 y el 9 de marzo de 1988, si bien se acompañaron de violencia en los barrios populares, no pudieron traspasar el umbral del primer día. El efecto importante derivado de esta debilidad estribó en que el gobierno pudo hacer caso omiso de las demandas presentadas por los organizadores. A pesar de esto, se fueron acumulando factores que impulsaban niveles crecientes de coordinación entre diversas organizaciones de tipo territorial, sindical o profesional. Uno

de los elementos interesantes en este proceso fue el afinamiento de las demandas, que pasaron a conjugar las clásicas reivindicaciones de las organizaciones de trabajadores con las de los movimientos populares territoriales.

Lo anterior puede atribuirse a la forma un tanto aleatoria en que se fueron conformando los mecanismos de coordinación. Dependieron de variables circunstanciales, como coincidencias de varias organizaciones políticas o el tino de alguna de ellas en definir algún medio de publicidad y de organización. Es lo que ocurrió, para sólo citar un ejemplo, con el liderazgo de Virtudes Alvarez, que parecía surgido de la nada pero que se conectó con la Conferencia de Organizaciones Populares, una de las varias instancias de coordinación que tenían sus correlatos políticos externos.

Como ya se señaló, la política de construcción del gobierno rápidamente generó componentes contraproducentes, responsables del deterioro del producto nacional. De manera que desde fines de la década pasada se registró una disminución sensible en las condiciones de vida de la población, agudizada por la escalada inflacionaria que culminó en 1990 con una tasa superior al 100%. La política económica del gobierno tuvo la cuota mayor de responsabilidad en esta evolución, ya que persistió en un abultado gasto en construcciones en gran parte ajenas a criterios productivos. Mientras el país entraba en un colapso energético que incidió en la caída del producto, para poner un caso, el gobierno no cejaba en el ritmo de finalización del llamado Faro a Colón, elefante blanco sufrido emocionalmente por la población.

En función de lo anterior, el gobierno perdió el consenso relativo que había logrado e, incluso, se vio confrontado por los rangos más influyentes de la clase burguesa. Entre 1989 y 1990 se dio el caso de que la burguesía manipuló discretamente sobre la movilización popular para dirimir sus pugnas con el gobierno, originadas por las altas tasas de inflación y las políticas de gasto. Esto no dejó de ser un ingrediente para que la protesta encontrara cauces organizativos mayores y ganara autoridad irrecusable ante la gran mayoría de la población.

Se crearon así las condiciones para que la convocatoria a huelga general lograra efectividad nacional, como se evidenció en los días 19 y 20 de junio de 1989. Las movilizaciones características del motín volvieron a alcanzar, en muchos

puntos del país, niveles que rememoraban lo sucedido en abril de 1984, con el saldo de cinco muertos, decenas de heridos y casi mil presos. Lo más importante es que esta huelga pasó exitosamente la prueba del fuego del primer día, señal captada por el gobierno para anunciar disposición a negociar con el movimiento popular. No obstante, no se obtuvieron reivindicaciones palpables, lo que resulta contraproducente para la continuidad de estos movimientos. Quizás se pueda agregar a este desenlace el progresivo desplazamiento de la atención nacional hacia las elecciones de mayo de 1990 para que en los meses siguientes se registrara una disminución sensible del movimiento popular.

El deterioro de la imagen pública del gobierno pasó a ser el punto neurálgico del debate político desde 1989. Ya entonces la inflación era muy elevada y se habían producido importantes protestas; pero lo más significativo vino a ser la proximidad de las elecciones de 1990. De nuevo, quedaba patente la correlación negativa entre coyunturas electorales y movimientos populares. Esto es todavía más patente en los meses previos a mayo de 1990, por cuanto el PLD se perfilaba con seguridad como opción triunfadora. Adicionalmente al deterioro de la imagen de Balaguer, el PRD se encontraba escindido entre lo que vendrían a ser luego dos partidos, y su descrédito se revirtió en beneficio del PLD. Se debe anotar, por otra parte, que el PLD se erigió más que nunca en factor de sabotaje a la movilización popular, instancia a la que nunca había contribuido, pero que ahora visualizaba como perturbadora del concierto de fuerzas que garantizarían su triunfo y que tenía un sesgo claramente conservador.

Esta distancia frente a la vida y expectativas de las masas populares fue una de las tantas causas que determinaron que el PLD no lograra una mayoría irrecusable, capaz de neutralizar los manejos electorales del partido de Balaguer. Otro de los elementos que jugó fue una disposición mucho más clara del candidato del PRD, Peña Gómez, a desplegar campaña en la población más pobre, dentro de la cual, efectivamente, alcanzó un alto volumen de votación, suficiente para inclinar la balanza a favor de Balaguer, a lo que se agregarían diversos procedimientos turbios y fraudulentos.

A pesar de que el conteo favoreció a Balaguer con 33,000

votos, a la mayor parte de la población no le cupo duda de que ese resultado carecía de legitimidad. En esta situación, el PLD logró el apoyo virtual de varias organizaciones de izquierda para oponerse a la continuación de Balaguer en el gobierno. A partir de ahí, el detonante de tipo político entraría a retroalimentar directamente la movilización popular, relación que no se había producido en ningún momento desde 1979.

De inmediato, pues, se reiniciaron las movilizaciones populares de escala nacional, suspendidas desde un año antes. Junto al componente político de repudio a la reelección, se encontraba la carga de que en los meses anteriores había seguido deteriorándose el nivel de ingresos y la eficiencia de los servicios públicos y sistemas de abastecimiento de productos de primera necesidad. Esta situación de caos alcanzó su clímax en los meses finales del año, caracterizados por apagones de largas horas, escasez de agua, desabastecimiento de productos como pan, azúcar y gasolina, este último ocasionando transtornos en el transporte y colas inacabables frente a las estaciones de expendio.

A todo lo anterior se agregó que, tan pronto tuvo asegurada la reelección, Balaguer operase un giro de política económica, aceptando por primera vez negociar en serio con el FMI. El presidente dilapidador pasó a practicar un sobreajuste que ocasionó un impacto paralizador sobre la economía y un suplementario disparo transitorio de la inflación. Había ya obtenido su propósito de permanecer en el poder, para lo cual requirió de gastos dirigidos a la distribución de prebendas. El ritmo de inflación hacía cada vez más evidente la necesidad de un giro de políticas, que pasó a ser exigido de manera perentorio por los organismos internacionales, lo que, de no aceptarse, aparejaba el riesgo de aislamiento y la paralización de nuevos recursos. Por lo demás, gracias a reformas administrativas y pese a la recesión severa, el gobierno logró incrementar los ingresos fiscales, por lo que pocos meses después reinició a todo vapor el programa de construcciones.

En estas condiciones, se tornó evidente para muchos dirigentes de izquierda que resultaba factible concitar la movilización popular en base a la convergencia de la demanda reivindicativa y de la exigencia de la destitución del gobierno. A mediados de julio, el PLD convocó un «paro cívico», que se cumplió de forma impresionante, máxime cuando no

intervinieron acciones violentas. La toma de posesión, el 16 de agosto de 1990, fue precedida por la primera huelga general de ese año, pronto seguida por otras dos. Sería materia de discusión qué determinaba la convocatoria, puesto que los dos principales bloques convocantes tenían propósitos disímiles, uno más inclinado al aspecto político de la renuncia y el otro a la demanda reivindicativa centrada en la recusación de la política de ajuste. Un tercer sector, orientado casi exclusivamente por un partido de izquierda, sostenía posiciones intermedias, en el sentido de exigir al gobierno que proporcionara «soluciones» o que renunciara si se mostraba inhabilitado para lograrlas.

En realidad, ambas partes extremas alimentaban gran suspicacia recíproca. Cada una de ellas trató de ganar la hegemonía a costa del requerimiento de una sólida unidad, como medio de movilizar a la población. En particular, el sector más moderado de los sindicalistas se negó a toda forma de colaboración con los otros sectores. Y si se mantuvo una aparente unidad en la huelga de agosto se debió a que fue convocada originalmente por las centrales sindicales, limitándose los otros sectores a sumarse. Esta huelga ya presupuso una prueba de fuego en relación al designio de doblegar la resolución del gobierno de aplicar la política de ajuste y a su propia prolongación en el poder. De todas las huelgas generales de los años que seguirían, ésta fue la de mayor apoyo, en lo que incidió la esperanza de sectores importantes de la población de que fuera posible una acción que impidiera la perpetuación de Balaguer o, al menos, la aplicación de la política de ajuste.

Como en otras ocasiones, el éxito de la huelga dependió en el fondo del grado efectivo de apoyo, a lo que se agregó el agregado operativo indispensable del motín. La fuerza pública tuvo que adoptar posturas amenazantes, incluyendo la orden de abrir fuego cuando cada jefe de unidad lo creyera necesario. A costa de 14 muertos, las movilizaciones se revelaron insuficientes para hacer ceder al gobierno. Los jóvenes izquierdistas presentes en las organizaciones populares territoriales habían preparado cuidadosos planes, pero se evidenció una gran debilidad para traducirlos a acción.

Cabe agregar que el terreno de confrontación elegido por

la izquierda era punto muy riesgoso: desafiar al gobierno en torno a su supervivencia. Para sostener el reto resultaba preciso un grado de fuerza del cual no disponían. Por lo visto, confiaban en el estado de ánimo de la población, obviamente mal calibrado. En fin de cuentas, se apostó a que la beligerancia gubernamental conduciría a una radicalización de la masa en el proceso de enfrentamientos. Otro requisito faltante estribaba en la ausencia de una unidad efectiva, lo que resultó mortal para la movilización de mediados de agosto. El sector radical intentó prolongar la movilización, pero tuvo que echar atrás. De hecho, el Colectivo, tras apoyar la huelga de los sindicalistas, mantuvo su llamado independiente para los días inmediatamente siguientes, desistiendo finalmente, con lo que dejaba una señal de debilidad.

En la huelga de mediados de agosto y en otras sucesivas se evidenció de nuevo el requerimiento de un apoyo efectivo, resultante de la propia percepción de la población. Si bien existía un apoyo significativo, no resultó de la magnitud con que lo ponderaron los dirigentes de las organizaciones territoriales. La clave del éxito en la convocatoria estribaba en situarse en el centro del debate nacional, interpretando correctamente el sentir de la porción más activa de la población. El apoyo se presentaba como variable dependiente de la certidumbre de que se hacía factible obtener algunas de las demandas. Pero, además, ese apoyo requería neurálgicamente del refuerzo del empleo de la violencia, algo que nadie estaba en capacidad de garantizar más allá de ciertos límites, a no ser en la propia acción improvisada, como se había puesto de relieve en otras ocasiones.

Ya en esta huelga quedó claro que el gobierno podía resistir la embestida de los movimientos sobre la base del monopolio de la fuerza. Por más que se extendiera la violencia en ese tipo de dispositivo, estaba ya evidenciado que tras el primer día los movimientos, a falta de alguna circunstancia especial, comenzaban a experimentar tendencias debilitantes, sobre todo la presión de los sectores dependientes de actividades por cuenta propia y la de los propietarios de establecimientos, que pasaban a exigir a sus empleados presentarse por encima de los riesgos.

Ante el fracaso de doblegar al gobierno ante esta crucial

movilización los sindicalistas optaron por recortar las demandas a planos estrictamente reivindicativos, mientras que las organizaciones populares, orientadas por algunos partidos de izquierda, juzgaron que las fallas habían sido subjetivas y que no procedía confiarse en el otro sector. De tal manera, con motivo de una segunda convocatoria de las centrales sindicales, en la víspera de la huelga, el 9 de septiembre, éstas aceptaron la oferta de negociación del gobierno, con lo que dejaron una situación confusa. Era patente que a pesar de la firma del presidente de un convenio que no convencía a nadie, éste simplemente quería ganar tiempo en una coyuntura difícil de legitimidad.

Las porciones más activas de la población leyeron tratos turbios como trasfondo del pacto de los sindicalistas. Esto explica que el Colectivo de Organizaciones Populares tuviera éxito parcial en el llamado a un movimiento por su cuenta exclusiva, fijado el 26 de septiembre. El Colectivo decidió correr todos los riesgos al trazarse sin ambages la táctica de centralizar la movilización alrededor de la petición de renuncia del gobierno. Igualmente, se planteó una convocatoria de larga duración, lo que mostraba incompreensión sobre su naturaleza.

La convocatoria exclusiva del Colectivo en el mes de septiembre no dejó de lograr bastante alcance, particularmente en algunas ciudades del centro del Cibao y en las barriadas del norte de Santo Domingo. Con ello el Colectivo conseguía su objetivo de desplazar la anterior hegemonía operativa de las centrales sindicales, ya sujetas a dudas morales. No obstante, al segundo día la movilización comenzó a evidenciar debilidad. Los grupos militantes no pudieron sostener un motín de proporción, aunque se registraron algunos muertos. Precipitadamente los dirigentes tuvieron que llamar al levantamiento el tercer día, cuando era patente que la normalidad se había restablecido.

En septiembre quedó patente que, confrontados al poder, los movimientos carecían de perspectiva para operar un cambio de la dirección del estado. Es cierto que no dejaban de tener razón en juzgar la situación del gobierno como minada en cuanto a su legitimidad. Pero no contaron con varios factores adversos, como la inexistencia de una fuerza externa al estado que obligara a un cambio político, la recomposición del apoyo

del grueso de la burguesía a partir de la aplicación del ajuste y la habilidad negociadora de Balaguer. Este, para desactivar un llamado a huelga, ofreció recortar el período presidencial dos años, con lo creó un foco de polarización que distrajo la atención de los problemas inmediatos.

La misma situación se experimentó en una tercera huelga general convocada el 19 de noviembre por los tres polos organizados, aunque cada uno actuando con completa independencia de los demás. Los sindicalistas adujeron que Balaguer no había cumplido las promesas garantizadas con su firma. Ya la Coordinadora Sindical se había resquebrajado, pues tres de las centrales decidieron llegar a un entendido duradero con el gobierno, en tanto que las restantes, con una excepción, se enrumbaron a una fusión que no parece haber tenido grandes consecuencias para una recomposición de la incidencia del movimiento sindical en la vida nacional.

A pesar de los infructuosos llamados en dos ocasiones anteriores, los dirigentes del Colectivo se obstinaron en convocar esa tercera huelga con idénticos contenidos que las anteriores. En este caso, se puso de manifiesto un desgaste del recurso a la huelga. Todavía obtenía bastante apoyo, pero un tanto rutinario, consciente la población de que no se obtendrían las demandas. Es de señalar que, a pesar de la coincidencia fáctica de los tres principales núcleos de dirección de los movimientos populares, el acaecido en noviembre se desarrolló sin violencia de ninguna clase. Esta peculiaridad se puede atribuir a un marcado descreimiento de la población en que se obtuvieran reivindicaciones. De hecho, esa huelga y la anterior del Colectivo habían tenido un respaldo fundamentalmente de corte político, aunque subsistiera el trasfondo del deterioro del ingreso. Eso explica el traslado de su centro de gravitación a las ciudades principales de la región norte, donde el Partido de la Liberación Dominicana había obtenido el caudal grueso de sostén electoral. Ahora bien, las ideas de huelga general indefinida o de cinco días manejadas esos días por el Colectivo y la Conferencia de Organizaciones Populares se revelaron carentes de virtualidad.

Por lo visto, los organizadores abusaron del mecanismo del movimiento social, provocando su descrédito en gran parte de la población. Se llegó al grado de que los principales dirigentes del Colectivo no tomaran en cuenta la reserva

generalizada ante la recurrencia de los llamados a huelga de parte de algunas de sus organizaciones más importantes, como COPADEBA, una liga de comités de moradores del norte de Santo Domingo con indudable presencia. Varias de estas organizaciones abandonaron el Colectivo, lo que parece que no preocupó demasiado a sus dirigentes, seguros de que tenían que llegar a las últimas consecuencias en el enfrentamiento del gobierno. Junto al descrédito de las huelgas, las organizaciones territoriales perdieron parte de su incidencia.

No obstante lo anterior, la aplicación sostenida de la política de ajuste renovaba los motivos de la protesta. Tras sostenidos incrementos de precios, el gobierno sólo consintió en un ligero aumento de salarios. La agitación resultante se manifestaba por medio de huelgas locales así como de sectores profesionales, como médicos y maestros. Ahora bien, quedó evidenciado que todas estas huelgas sectoriales y locales se saldaban en el fracaso por el aislamiento en que se confinaban. Se crearon ciertas condiciones para que las principales organizaciones convocaran de nuevo huelgas generales a mediados de 1991. El Colectivo tomó la vanguardia, haciendo más claro que nunca que la gran demanda estribaba en la renuncia del presidente Balaguer. Después de posposiciones de fechas, que denotaban debilidad, acordó la fecha del 3 y 4 de julio con otros sectores, fundamentalmente en contra del FMI. Días antes de esa fecha, y ya hecha la convocatoria, Balaguer anunció la final concertación de un acuerdo con el organismo internacional. La huelga se desarrolló con cierto apoyo, especialmente en las ciudades del Cibao, durante su primer día, pero en el segundo las actividades se habían normalizado. El Colectivo había entablado una prueba de fuerza ganada por el gobierno.

El capítulo siguiente de esta confrontación se produjo contados días después, el 9 de julio, fecha señalada por la Central de Trabajadores Unitaria -producto de la fusión de varias de las centrales antes agrupadas en la Coordinadora Sindical- para una huelga general indefinida. La CTU recibió apoyo del bloque de organizaciones de la antigua Conferencia, así como de otros sectores corporativos y partidarios, sobresaliendo el PLD y el PRD, los cuales en conjunto habían obtenido cerca del 58% en las pasadas elecciones. El Colectivo decidió sumarse, de forma que se conformó un bloque único

de organizaciones políticas y sociales contrarias al gobierno. De hecho el paro fue exitoso, sin que se produjera la violencia prevista por el gobierno. Al parecer, los dirigentes de la CTU captaron que no podrían sostener indefinidamente el paro, por lo que llamaron a su levantamiento a las 48 horas, bajo el supuesto de dar oportunidad al gobierno de ponderar tranquilamente las demandas. En caso contrario se llamaba a nueva huelga general los días 29 a 31 de julio. El abuso del medio por los dirigentes sindicales llegó a su clímax y, tras un desactivamiento no justificado, la población por lo visto juzgó que la convocatoria no tenía sentido. El gobierno ni siquiera tomó en serio esa convocatoria.

A pesar de las señales adversas, al obstinarse los dirigentes sindicales en la huelga de tres días, se escenificó el último capítulo de los movimientos populares nacionales. La huelga del 29 de julio resultó fallida el mismo primer día, cuando las actividades laborales se desarrollaron en la normalidad. El ambiente se enrareció más que nunca en el movimiento popular, pues la sensación de derrota se acompañó de acusaciones y recriminaciones. En cualquier caso, el golpe recibido con el fracaso rotundo, sólo equiparable relativamente al de la huelga de 1987 aunque de efectos muy distintos, conllevó a la finalización del prototipo de movimiento social considerado en estas páginas.

## VII

Para evaluar sintéticamente las características de los movimientos populares puede concluirse en que su gran debilidad ha estribado en la imposibilidad de sus gestores de pasar de la movilización esporádica a la institucionalización. La preeminencia de objetivos a corto plazo de todos los bloques convocantes puede ser en gran medida responsable de esta situación, al menos en lo que toca a la ausencia de atención a procedimientos de integración organizada de la población y de coordinación efectiva de los diversos sectores en un organismo con capacidad de incidir con fuerza en el debate político.

En consecuencia, las organizaciones populares no han logrado suplantar consistentemente las propias ausencias de los partidos políticos en cuanto concierne al hallazgo de

mecanismos de participación y representación de la población. A primera vista parece que incluso para sobrevivir, en la depresión en que se encuentran hasta hoy, las organizaciones territoriales deberán lograr cambios decisivos en sus conformaciones y prioridades, así como ser capaces de establecer planos de cohesión libres de manipulación y hegemonismo.

En el centro de la propuesta política que cabe reconsiderar, se encuentra el problema del «sujeto». La práctica ha evidenciado la dificultad de los habitantes de los barrios pobres de constituirse en sustitutos centrales del proletariado o de algo similar. Parece hoy fuera de contexto sustentar una propuesta política en la centralidad de un sector. La cuestión de una fuerza social de transformación debe trasladarse al ámbito de la voluntad política, producto de la sistematización de las demandas del conjunto de sectores nacionales con posturas progresivas. En tal sentido, no parece válido repetir la experiencia de confiar un proyecto en un sujeto central de duración indefinida. La acción política deberá implicar modificaciones constantes y readecuaciones de propuestas. Sobre todo, requiere del acierto concertado, a fin de prevenir errores e insuficiencias como los que condujeron al agotamiento actual del patrón de movimientos sociales populares.

Con lo anterior no se quiere pronosticar el no retorno de movimientos de este tipo. No es demasiado riesgoso suponer que pueden reiterarse. Pero están llamados a tener efectos decrecientes a menos que se modifique sustancialmente el panorama en lo que se ha dado por llamar el movimiento popular.

## BIBLIOGRAFIA

Centro de Estudios de la Educación, *Otro abril de lucha popular*, (mimeo), Santo Domingo, (1984).

Centro de Investigación y Documentación Social, *Crisis y movimientos populares en la República Dominicana*, Santo Domingo, 1984.

Dore, Carlos, «¿Por qué se produjo abril de 1984?», *Impacto Socialista*, 2a. época, no. 2 (1985).

Pérez, César y Artiles, Leopoldo, *Movimientos sociales*

dominicanos. *Identidad y dilemas*, Santo Domingo, 1992.

Ruiz B., Víctor E., *Lucha social y movimiento sindical en la República Dominicana. Agosto de 1990-julio de 1991*, Santo Domingo, 1992.

Tejada, Darío, «Movimiento popular, huelga general y coyuntura» *El Siglo*, 30 de diciembre de 1989.